

De: Notificaciones Judiciales Colpensiones <notificacionesjudicialescolp@colpensiones.gov.co>
Enviados: viernes, 30 de julio de 2021 9:44:01 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
Para: radicacionjudicial2 <radicacionjudicial2@syc.com.co>
Asunto: Fwd: SUBSANACIÓN RADICADO 2021 - 00116-00

COLPENSIONES
2021_8657779
30/07/2021 10:23:39 a. m.
ROTONDA VIRTUAL DESPACHOS JUDICIALES
BOGOTÁ D.C.
Dem. Jud. Y tutelas
No Folios: 15



20218657779

DEMANDA

----- Forwarded message -----

De: MARIA DEL CARMEN VARGAS ACEVEDO <maria5.vargas@hotmail.com>

Date: vie, 30 jul 2021 a las 8:00

Subject: SUBSANACIÓN RADICADO 2021 - 00116-00

To: Juzgado 01 Laboral Circuito - Boyaca - Sogamoso <j01lctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co>, Acciones Legales <accioneslegales@proteccion.com.co>, afp_proteccion@proteccion.com.co <afp_proteccion@proteccion.com.co>, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>

Buen día, señores J01LCTO SOGAMOSO;

Favor dar acuso re recibido.

Cordial Saludo,

María Vargas
Abogada

Doctor
HÉCTOR BASTIDAS BARAJAS
JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO
E. S. D.

Radicado. 15-759-31-05-001-2021-00116-00
REF: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA. (S.S.)
DEMANDANTE: ANA JULIA MACHUCA FONSECA
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA

ASUNTO: SUBSANACIÓN DEMANDA

María del Carmen Vargas Acevedo, como apoderada de la parte demandante, acudo a su despacho para subsanar la demanda en los errores advertidos por este despacho en auto de fecha 22 de julio de 2021.


Acatando las directrices de este Juzgado, se realizan las correcciones a los hechos indicados eliminando las manifestaciones personales, apreciaciones, e indicaciones de normas jurídicas, para cumplir con los requisitos del artículo 25 del C. P. T y de la SS., modificado por la Ley 712 de 2011.

De igual forma allego copia del correo electrónico con el envío de la subsanación de la demandada, enviada a la empresa demandada, en los términos del decreto 806 de 2020.

Dado lo anterior, le solicito a su señoría admitir la presente demanda para dar inicio formal al proceso laboral que aquí se estudia.

Por lo anterior agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente,



MARÍA DEL CARMEN VARGAS ACEVEDO
C.C. No. 46.365.659 de Sogamoso
T. P. No. 208747 del C. S. de la J.



Señor
JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO -
E.S.D.

Asunto: DEMANDA ORDINARIA LABORAL
DEMANDANTE: ANA JULIA MACHUCA FONSECA
DEMANDADO: Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías PROTECCIÓN S.A. - Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES

María del Carmen Vargas Acevedo, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.365.659 de Sogamoso, T.P. No. 208747 del C.S. de la J., obrando como apoderada judicial de la señora **ANA JULIA MACHUCA FONSECA**, según poder adjunto; por medio del presente escrito, me permito Instaurar **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, tendiente a la **NULIDAD DEL TRASLADO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL SOLIDARIO, DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES/COLPENSIONES A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PESIONES DE CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, la que sustento en los siguientes;

HECHOS

Primero: La fecha de nacimiento de la afiliada **ANA JULIA MACHUCA FONSECA** es el 28 de abril de 1964.

Segundo: La fecha de vinculación al sistema general de pensiones a través de la afiliación al Seguro Social (ahora Administradora de Pensiones COLPENSIONES) fue en agosto de 1990.

Tercero: Las semanas cotizadas por parte de **ANA JULIA MACHUCA FONSECA** a la fecha de la demanda son 1,133 cotizadas, más 38,61 semanas en revisión, así consta en la historia anexa.

Cuarto: Me permito relacionar las circunstancias adversas, en que se dio la afiliación al fondo privado tales así;

- a- La afiliación de la señora **ANA JULIA MACHUCA FONSECA**, a la administradora de Pensiones y Cesantías **PROTECCIÓN S.A.**, de profesión Médico Veterinario Zootecnista; se dio en el mes de julio de 1996, cuando ella contaba con 32 años de edad, llevaba 27,57 semanas cotizadas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones).
- b- Esta afiliación se dio por el de trabajo desempeñado por la señora **ANA JULIA MACHUCA FONSECA**, como independiente, (de suministros veterinarios).
- c- La afiliación se realizó con la asesora comercial, que para el momento atendía estas afiliaciones.
- d- En todo momento, esta asesora afirmó que no se vería perjudicada por el cambio de régimen pensional, que era la mejor opción por tener excelentes rendimientos financieros, garantizados, y que podía pensionarse cuando se quisiera, y que el Seguro Social se iba a acabar, que por esta razón se había creado los Fondos Privados de Pensiones.
- e- Fue así, como se realizó el cambio para esa época; razón por la cual se encontraba en este fondo de pensiones.
- f- La afiliada **ANA JULIA MACHUCA**, nunca fue asesorada, por ninguna de las entidades para el cambio de régimen.



- g- La afiliada **ANA JULIA MACHUCA**, nunca recibió información clara e imparcial que le permitiera tomar la mejor decisión sobre qué, sistema le hubiese convenido más para su vejez.
- h- Situación por la que, la señora **ANA JULIA MACHUCA**, ve cercenada la expectativa que tiene de su mesada pensional acorde a sus aportes con el fondo de pensiones (**PROTECCION S.A.**).

Quinto: En las seiscientas noventa y dos semanas (692), que la señora **ANA JULIA MACHUCA**, ha estado afiliada con la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías **PROTECCIÓN S.A.**; esta administradora no ha cumplido a los principios definidos en el decreto 255 de **debida diligencia, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, y educación para el consumidor financiero.**

Sexto: A la afiliada **ANA JULIA MACHUCA FONSECA**, no tuvo acceso a herramientas financieras, con el objeto de conocer los cálculos preliminares, sobre la posible monto de su pensión.

Séptimo: La señora **ANA JULIA MACHUCA FONSECA**, con el fondo de cesantía **PROTECCIÓN**, solo recibirá una mesada pensional de un salario mínimo, mesada esta muy inferior a la que recibiría el **COLPENSIONES**.

Octavo: De manera escrita esta abogada, agotó la vía administrativa con la solicitud a Protección S.A. para el traslado de fondo de pensiones, de fecha 03 de diciembre de 2020, enviada físicamente por la empresa **INTERRAPIDISIMO S.A.**, con número de guía 700046072078, recibido por **LUZ ADRIANA GUTIERREZ**, quien se identificó con cedula No. 1.049618140, funcionaria de Protección S.A. de la ciudad de Tunja/Boyacá.

Noveno: A la fecha de presentación de la demanda, no se recibió respuesta alguna, ni a mi representada, ni a esta abogada vía correo electrónico, el cual fue aportado, como a la dirección física aportada, operando aquí el silencio administrativo positivo.

Décimo: Igualmente, se envió solicitud a la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, radicado directamente en la oficina de Sogamoso/Boyacá, bajo el radicado 2020_12436019, de fecha 03 de diciembre de 2020, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna, configurándose el silencio administrativo positivo, establecido en el art. 52 de la Ley 1437/2011.

PRETENSIONES:

Primera:

* Que se declare la Nulidad del Traslado, y afiliación del régimen de prima al de ahorro individual administrado por el fondo **PROTECCIÓN S.A.** de fecha agosto de 1,996, como lo registra en la historia laboral en la página número dos, sin especificar día.

Segunda:

* Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al fondo **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **Colpensiones** todas las cotizaciones y rendimiento en la cuenta de ahorro individual del afiliado **ANA JULIA MACHUCA FONSECA**.



Tercera:

Que, se declare que, para efectos pensionales, continúa válidamente afiliada al Instituto de Seguros Sociales hoy, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, en el régimen de prima media, con prestación definida, al que pertenecía antes de la viciada afiliación al Fondo De Cesantías y Pensiones **PROTECCIÓN S.A.**

Cuarta: Igualmente, se le ordene a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**; gestionar, tramitar y facilitar el traslado de las cotizaciones y rendimientos de la cuenta de ahorro individual de la afiliada **ANA JULIA MACHUCA FONSECA a COLPENSIONES.**

Quinta:

Se declaren, y reconozcan en favor de la demandante, otro derecho diferente a los pretendidos en esta demanda, siempre y cuando los halle demostrado el operador judicial en la aplicación de las facultades extra y ultra petita que tiene el operador judicial.

Sexta:

Se condene en costas y gastos procesales a las demandadas, como los ocasionados con el contrato de prestación de servicios del profesional del derecho que me representa.

FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO:

Ley 100 del 93, artículo 1494 y 1602 del C.C. artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994, Decreto 3995 de 2008, ley 1748 de 2014.

Decreto 2555 del 2010, indicó que las administradoras tienen el deber del buen consejo, por lo que están obligadas a proporcionar a los consumidores financieros, información completa respecto a los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes; y aquí no sucedió, mi representada no recibió dicha asesoría por parte de las entidades COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.

En las 692 semanas que ha estado afiliada con la administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.; esta administradora no ha dado cumplimiento a los principios definidos en el Decreto 2555 del 2010 como son:

1. Debida Diligencia

1. Debida Diligencia. Las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos y/o en la prestación de sus servicios a los consumidores financieros, **a fin de que éstos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en relación con las opciones de afiliación a cualquiera de los dos regímenes que conforman el Sistema General de Pensiones, así como respecto de los beneficios y riesgos pensionales de la decisión.** En el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deberán poner de presente los tipos de fondos de pensiones obligatorias que pueden elegir según su edad y perfil de riesgo, con el fin de permitir que el consumidor financiero pueda tomar decisiones informadas. **Este principio aplica durante toda la relación contractual o legal, según sea el caso.** *Subrayado fuera de texto.*



2. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna

2. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán suministrar al público información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita a los consumidores financieros conocer adecuadamente los derechos, obligaciones y costos que aplican en los dos regímenes del Sistema General de Pensiones; igualmente aquí no ocurrió.

3. Educación para el consumidor financiero

Educación para el consumidor financiero. Las administradoras del Sistema General de Pensiones procurarán una adecuada educación de los consumidores financieros respecto de los productos y servicios financieros que ellas ofrecen. De manera especial las sociedades administradoras de fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, procurarán una adecuada educación de los consumidores financieros respecto de los tipos de fondos de pensiones obligatorias del esquema "Multifondos", de los productos y servicios que ofrecen, de la naturaleza de los mercados en los que actúan **y de los beneficios y riesgos pensionales de la elección de cualquiera de los regímenes según su edad y perfil de riesgo, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos.**

La afiliada **ANA JULIA MACHUCA FONSECA**, igualmente siente menoscabados sus derechos, que, como afiliada tiene consagrados en el artículo 2.6.10.1.3 del **Decreto 2555 del 2010**, **respecto de recibir información cierta, suficiente, clara y oportuna; acceso a herramientas financieras, con el objeto de conocer los cálculos preliminares sobre el posible monto de su pensión; adecuada educación sobre los diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos;** exigir la debida diligencia, asesoría e información en la prestación del servicio por parte de las administradora de FONDO DE PENSIONES PROTECCIÓN S.A. NI de parte de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

La afectación mayor, al no recibir la información clara e imparcial que le permitiera tomar la mejor decisión; sobre qué Régimen pensional le hubiese convenido más, con el objetivo de tomar la mejor decisión para su vejez; se vislumbra hoy ad portas de completar los requisitos para su pensión, al revisar la mesada pensional que le espera en la administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.; que al tener apenas algo más de 116 millones en su cuenta individual, y teniendo en cuenta lo que hace falta para cumplir sus 57 años, este saldo solamente le alcanzará para obtener **una pensión equivalente a 1 salario mínimo;** entre tanto que haciendo la liquidación **con Colpensiones su pensión sería superior a los dos salarios mínimos, de acuerdo a lo registrado en su historial laboral así:**

<u>Año-Mes</u>	<u>Índice</u>	<u>Salario sin indexar</u>	<u>Salario indexado</u>
2011-01	74,12	1.058.000	1.505.637
2011-02	74,57	2.730.000	3.861.612
2011-03	74,77	1.785.000	2.518.146
2011-04	74,86	1.392.000	1.961.370
2011-05	75,07	2.384.000	3.349.731



2011-06	75,31	1.817.000	2.544.910
2011-07	75,42	1.833.000	2.563.575
2011-08	75,39	1.879.000	2.628.955
2011-09	75,62	1.672.000	2.332.221
2011-10	75,77	2.271.000	3.161.477
2011-11	75,87	1.929.000	2.681.836
2011-12	76,19	2.716.000	3.760.122
2012-01	76,75	1.535.000	2.109.600
2012-02	77,22	2.714.000	3.707.235
2012-03	77,31	2.010.000	2.742.398
2012-04	77,42	2.257.000	3.075.024
2012-05	77,66	1.982.000	2.692.008
2012-06	77,72	1.749.000	2.373.707
2012-07	77,7	2.857.000	3.878.460
2012-08	77,73	1.799.000	2.441.252
2012-09	77,96	1.668.000	2.256.807
2012-10	78,08	2.033.000	2.746.425
2012-11	77,98	1.774.000	2.399.609
2012-12	78,05	1.865.000	2.520.438
2013-01	78,28	1.175.000	1.583.278
2013-02	78,63	1.999.000	2.681.604
2013-03	78,79	1.773.000	2.373.601
2013-04	78,99	1.860.000	2.483.768
2013-05	79,21	2.240.000	2.982.896
2013-06	79,39	1.553.000	2.063.364
2013-07	79,43	1.986.000	2.637.332
2013-08	79,5	1.935.000	2.567.343
2013-09	79,73	2.016.000	2.667.097
2013-10	79,52	1.965.000	2.606.491
2013-11	79,35	2.156.000	2.865.972



2013-12	79,56	2.216.000	2.937.955
2014-01	79,95	1.734.000	2.287.709
2014-02	80,45	2.369.000	3.106.055
2014-03	80,77	2.169.000	2.832.563
2014-04	81,14	1.587.000	2.063.061
2014-05	81,53	2.073.000	2.681.958
2014-06	81,61	1.763.000	2.278.658
2014-07	81,73	2.464.000	3.180.016
2014-08	81,9	2.087.000	2.687.873
2014-09	82,01	2.443.000	3.142.149
2014-10	82,14	2.533.000	3.252.749
2014-11	82,25	1.608.000	2.062.150
2014-12	82,47	2.647.000	3.385.541
2015-01	83	2.276.000	2.892.440
2015-02	83,96	3.439.000	4.320.459
2015-03	84,45	2.502.000	3.125.056
2015-04	84,9	2.152.000	2.673.651
2015-05	85,12	3.030.000	3.754.751
2015-06	85,21	1.778.000	2.200.956
2015-07	85,37	2.648.000	3.271.770
2015-08	85,78	3.384.000	4.161.160
2015-09	86,39	2.263.000	2.763.066
2015-10	86,98	2.266.000	2.747.961
2015-11	87,51	2.476.000	2.984.442
2015-12	88,05	2.707.000	3.242.866
2016-01	89,19	2.790.000	3.299.576
2016-02	90,33	2.762.000	3.225.238
2016-03	91,18	2.422.000	2.801.849
2016-04	91,63	2.394.000	2.755.856
2016-05	92,1	2.849.000	3.262.894



2016-06	92,54	2.859.000	3.258.778
2016-07	93,02	2.443.000	2.770.239
2016-08	92,73	2.958.000	3.364.713
2016-09	92,68	3.183.000	3.622.603
2016-10	92,62	2.217.000	2.524.824
2016-11	92,73	2.541.000	2.890.377
2016-12	93,11	3.322.000	3.763.340
2017-01	94,07	4.104.000	4.601.785
2017-02	95,01	2.949.000	3.273.977
2017-03	95,46	2.126.395	2.349.593
2017-04	95,91	3.419.797	3.761.028
2017-05	96,12	2.373.887	2.605.052
2017-06	96,23	2.928.925	3.210.465
2017-07	96,18	2.963.370	3.249.909
2017-08	96,32	2.798.073	3.064.169
2017-09	96,36	2.220.864	2.431.058
2017-10	96,37	2.226.572	2.437.053
2017-11	96,55	3.757.106	4.104.604
2017-12	96,92	2.641.341	2.874.625
2018-01	97,53	3.384.999	3.660.922
2018-02	98,22	3.389.445	3.639.978
2018-03	98,45	2.801.720	3.001.782
2018-04	98,91	4.261.955	4.545.051
2018-05	99,16	2.377.767	2.529.315
2018-06	99,31	3.057.896	3.247.879
2018-07	99,18	3.198.757	3.401.945
2018-08	99,3	2.627.021	2.790.515
2018-09	99,47	3.426.798	3.633.846
2018-10	99,59	3.056.560	3.237.333
2018-11	99,7	2.824.506	2.988.254



2018-12	100	3.588.224	3.784.859
2019-01	100,6	3.211.101	3.366.868
2019-02	101,18	2.549.262	2.657.602
2019-03	101,62	2.894.724	3.004.679
2019-04	102,12	2.452.387	2.533.077
2019-05	102,44	3.880.394	3.995.548
2019-06	102,71	2.622.213	2.692.932
2019-07	102,94	3.170.487	3.248.717
2019-08	103,03	3.383.081	3.463.529
2019-09	103,26	3.025.292	3.090.333
2019-10	103,43	2.889.768	2.947.044
2019-11	103,54	2.926.306	2.981.135
2019-12	103,8	3.756.972	3.817.778
2020-01	104,24	3.397.954	3.438.375
2020-02	104,94	4.183.993	4.205.523
2020-03	105,53	2.841.065	2.839.719
2020-04	105,7	2.951.122	2.944.980
2020-05	105,36	2.660.109	2.663.139
2020-06	104,97	3.343.049	3.359.291
2020-07	104,97	3.766.589	3.784.889
2020-08	104,96	2.951.210	2.965.831
2020-09	105,29	4.755.031	4.763.612
2020-10	105,23	3.965.329	3.974.750
2020-11	105,08	4.275.282	4.291.556
2020-12	105,48	4.275.108	4.275.108

Se obtiene un **IBL (Ingreso base de Liquidación) de \$3,038,613. oo**

Mes del IPC Final a utilizar	IBL promedio sin Indexar	IBL promedio Indexado
2020-12		
105,48	2.602.948	3.038.613

Teniendo en cuenta el valor del salario mínimo para el año 2020 (\$877.803.oo)



$$r = 65,5 - (0,5 * S)$$

$$S = \text{IBL/SMM} = 3,038,613/877,803 = 3,46$$

$$r = 65,5 - (0,5 * 3,46) = 63,77\%$$

Mesada Pensional = 3,038,613 * 63.77% = \$1,937,723 (Un millón novecientos treinta y siete mil setecientos veintitrés pesos)

Artículo 2.6.10.1.3 Derechos.

Los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones tendrán los siguientes derechos, en lo que les sea pertinente:

1. Ser informados de manera cierta, suficiente, clara y oportuna de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multifondos, de las diferentes modalidades de pensión y de los efectos y consecuencias de la no toma de decisiones.
2. Seleccionar el régimen y elegir la administradora de fondos de pensiones y trasladarse voluntariamente tanto de régimen como de administradora, de acuerdo con las normas aplicables en la materia.
3. Acceder a las herramientas financieras que las administradoras decidan ofrecer con el objeto de permitir al consumidor financiero conocer los cálculos preliminares sobre el posible monto de su pensión, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán ofrecer dichas herramientas
4. Recibir una adecuada educación respecto de los diferentes productos y servicios ofrecidos, los costos que se generan sobre los mismos, sus derechos y obligaciones, así como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos.
5. Exigir la debida diligencia, asesoría e información en la prestación del servicio por parte de las administradoras.

Frente a la importancia de la información y las consecuencias de su ausencia, la providencia **CSJ SL4964-2018 dispuso:**

[...] el objeto del sistema general de pensiones la garantía a la población de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de las prestaciones, así como la ampliación progresiva en su cobertura, y estando enmarcado en que, conforme el literal b) del artículo 13 de la ley en cita, la elección de cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, lo que se exige no es cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada, cuya infracción castiga la propia normativa en la medida en que indica que si el empleador o cualquier persona natural o jurídica la desconoce, se hace merecedor de las sanciones previstas en el inciso 1 del artículo 271, esto es que „el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de la Salud según el caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente, ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al



Fondo de Solidaridad Pensional o a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente, subrayado fuera de texto.

Así mismo tal disposición prevé las consecuencias en la infracción de la información verazcuales que «La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador» Subrayado fuera de texto.

Así que es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente y, de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (subrayas fuera del texto).

Frente al deber de la información: contenido, y alcance; **la CSJ en la SL2324 - 2019 señala:**

Así las cosas, teniendo como punto de partida el hecho de que la afiliación o traslado entre regímenes trae consigo repercusiones de gran envergadura, a saber, los términos en que se causará y disfrutará el derecho fundamental a la pensión, debe indicarse con especial énfasis que el contenido de la información a suministrar por parte de las administradoras, debe constar imprescindiblemente tanto en las etapas del proceso de traslado, como de los beneficios o inconvenientes que se puedan recaer sobre el afiliado, en concordancia con las diferentes alternativas para acceder a determinada prestación en el RPM o en el RAIS.

Por ende, esta Corporación en la providencia CSJ SU 7595-2017, ha destacado como deberes y obligaciones de los fondos:

(i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (ii) el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad; (iii) una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más



activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconveniente, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado a tomar una opción que claramente el perjudica. Subrayado fuera de texto.

Se colige que el contenido de la información que los fondos deben suministrar no debe ser superficial ni abstracta, por el contrario, debe supeditarse concretamente a las condiciones de cada uno de los afiliados. En ese orden de ideas, hace parte de los datos necesarios que se deben entregar, entre otros, la posibilidad de que aquellas personas vinculadas al RPM y que eran beneficiarias del régimen de transición, puedan perder dicha expectativa legítima de acceder a la pensión de vejez conforme a las prerrogativas existentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. No cabe duda que, ocultar dicha novedad representa un agravio para el interesado, al menos, en lo que atañe al simple hecho de no poder decidir con todos los elementos de juicio que rodean su caso particular.

Respecto de la carga de la prueba de la información suministrada la CSJ en la SL2324 - 2019 señala:

La Sala ha fijado que es obligación de las administradoras de los fondos de pensiones demostrar que no hubo asimetría de la información y, por lo tanto, proveer a los jueces de todos los medios de convicción que permitan dar certeza de que, al momento de producirse el traslado entre regímenes, el afiliado contaba con todos los elementos de juicio suficientes para decidir libre y voluntariamente (CSJ SL12136-2014).

Así mismo, y con base en la suscripción del formulario de traslado como única prueba para desvirtuar la negligencia en la remisión de información al afiliado, la Corte en la providencia referida anteriormente dijo:

De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

4. Efectos de la nulidad de traslado

Sobre las consecuencias de declarar la nulidad del traslado entre regímenes pensionales, con ocasión del incumplimiento del deber que les asiste a las administradoras de suministrar



la información necesaria para que el afiliado tome una decisión libre y veraz en los términos descritos con anterioridad, la Sala ha indicado que procede la devolución de los valores que el determinado fondo hubiera recibido, entre otras, las cotizaciones, los bonos pensionales si fuere del caso, además de los rendimientos e intereses que se hubieren causado.

COMPETENCIA:

Como se trata de una acción de nulidad de un traslado la cual no tiene cuantía, y siendo el lugar del domicilio del demandado en esta ciudad, usted señor Juez laboral del circuito de Duitama, competente para conocer de la presente acción.

PRUEBAS:

Sírvase señor Juez, tener como pruebas las siguientes:

1. El poder a mí conferido
2. Registro civil de nacimiento del demandante.
3. Fotocopia cédula Sra. Ana Julia Machuca.
4. Historia laboral actualizada (para demostrar semanas cotizadas)
5. Reclamación administrativa a Col pensiones de Sogamoso.
6. Reclamación Administrativa a Protección S.A.
7. Constancia de prueba de entrega No.700046072078 de Interrapidísimo.

NOTIFICACIONES:

La suscrita recibirá notificaciones en la calle 13 No. 33 A 22, Apto. 202 de la Ciudad de Duitama/Boyacá, email: maria5.vargas@hotmail.com , No. móvil: 3017173324.

Las de mi cliente en la carrera 8 No. 5 -08 Centro en el Municipio de Tuta/Boyacá, No. móvil: 3108067866, email: ajuma2010@hotmail.es .

La demandada Protección S.A., Oficina principal calle 49 No. 63-100 Medellín, correo electrónico: accioneslegales@proteccion.com.co, afp_proteccion@proteccion.com.co, teléfonos: 5109099, Bogotá: transversal23 No. 97-73 Piso 5 ED. CITY BUSSINES Bogotá, teléfonos: 6012525/6013535.

La demandada Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, en la Cra. 10 No. 72-33 Piso 11 Bogotá, correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co ,teléfono: 4890909.

Del señor Juez, atentamente,



MARÍA DEL CARMEN VARGAS ACEVEDO
C.C. No. 46.365.659 de Sogamoso/Boyacá
T.P. No. 208747 del C.S. de la J.
Email: maria5.vargas@hotmail.com



Señor
JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA – BOYACÁ -
E. S. D.

REF: PODER ESPECIAL

ANA JULIA MACHUCA FONSECA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.377.984, domiciliada en carrera 8 No. 5 – 08 Centro, municipio de Tuta /Boyacá, email: ajuma2010@hotmail.es, por medio del presente escrito, manifiesto al señor Juez; que Confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE**, a la Doctora **MARÍA DEL CARMEN VARGAS ACEVEDO**, igualmente mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.365.659 de Sogamoso- Boyacá, T.P. No. 208747 del C.S. de la J., domiciliada en la Calle 13. No. 33 A 22, Apto.202. de la ciudad de Duitama, email: maria5.vargas@hotmail.com; para que, en mi nombre y representación, presente **Demanda Ordinaria Laboral de Nulidad de Traslado de Régimen Pensional** en contra del **FONDO DE CESANTÍAS Y PENSIONES – PROTECCIÓN -** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** -, para que por medio de sentencia se Declare la Nulidad E Ineficacia del Traslado, que se le efectuó al cotizante del régimen de prima al régimen de ahorro individual con solidaridad; en consecuencia ordenar el traslado del cotizante al régimen de prima media administrado por Colpensiones, con los correspondientes aportes de su cuenta de individual y sus rendimientos debidamente indexados.

Mi apoderada queda facultada para Presentar la correspondiente demanda, recibir, sustituir, transigir, conciliar, desistir, renunciar, nombrar defensor suplente, y en general todas las facultades legales para mi defensa y el buen desempeño de éste mandato, en concordancia con el art. 77 del C.G.P.

Sírvase en consecuencia Señor Juez; tener a la Dra. **MARÍA DEL CARMEN VARGAS A.** Como mi Abogada, en los términos y efectos para el presente poder.

Del señor Fiscal, atentamente,

ANA JULIA MACHUCA FONSECA
C.C. No. 40,377,984 de Villavicencio- Meta -

ACEPTO:



MARÍA DEL CARMEN VARGAS ACEVEDO
C.C. No. 46.365.659 de Sogamoso
T.P. No. 208747 del C.S. de la J.

